



Proceso	Ejecutivo
Demandante	Financiera Dan Regional
Demandado	Ivanagro S.A.
Radicado	No. 05001-31-03-019-2020-00056-04
Instancia	Segunda
Ponente	Luis Enrique Gil Marín
Providencia	Auto interlocutorio
Asunto	Resuelve solicitud de prejudicialidad
Decisión	Niega solicitud
Tema	Prejudicialidad
Subtemas	Suspensión del proceso por la existencia de otro proceso judicial. Etapa investigativa en la acción penal. inicio del proceso penal.

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín (Ant.), dieciocho de enero de dos mil veintitrés

Se resuelve la solicitud de suspensión del proceso presentada por el apoderado del extremo pasivo por prejudicialidad, argumentando que: *“actualmente se adelanta investigación penal en la Fiscalía General de la Nación (...) bajo el SPOA 05-00-1600-248-2020-01552, por los delitos de Falsificación el Documento Privado, Concierto para Delinquir, Estafa y Enriquecimiento ilícito, por la emisión de las facturas*

cambiaras de compraventa que cimientan este proceso y otros de la misma índole”.

III. CONSIDERACIONES

El Art. 161 del C.G.P., establece: *“El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión del proceso en los siguientes casos:*

“1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención. El proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso declarativo iniciado antes o después de aquel, que verse sobre la validez o la autenticidad del título ejecutivo, si en este es procedente alegar los mismos hechos como excepción.

“2. Cuando las partes la pidan de común acuerdo, por tiempo determinado. La presentación verbal o escrita de la solicitud suspende inmediatamente el proceso, salvo que las partes hayan convenido otra cosa.

“PARÁGRAFO. Si la suspensión recae solamente sobre uno de los procesos acumulados, aquel será excluido de la acumulación para continuar el trámite de los demás.

“También se suspenderá el trámite principal del proceso en los demás casos previstos en este código o en disposiciones especiales, sin necesidad de decreto del juez”.

De lo anterior se sigue que la suspensión del proceso por prejudicialidad penal procederá cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial; pero en el presente caso, tal como lo indica el solicitante, no se ha dado inicio al proceso penal, toda vez que la denuncia solo se encuentra en la etapa preliminar de investigación, ya que la etapa de juzgamiento que se debe adelantar ante el respectivo juez penal, empieza con la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía que a su vez finaliza la etapa de investigación; estadio procesal que aún no se ha abordado en el asunto de marras y, por lo tanto, el proceso penal como tal no se ha iniciado, pues como viene de indicarse, aún se viene adelantando la investigación penal.

Frente a las etapas de la acción penal, la jurisprudencia patria ha establecido: *"5.4.1. La actuación penal se inicia desde el momento en que la Fiscalía General de la Nación tiene información de la noticia criminal por medio de denuncia, querella, petición especial o por cualquier otro medio idóneo (art. 200 C.P.P.).[47]* No obstante, es posible que la noticia criminal no tenga la información suficiente para iniciar la acción penal, evento en cual se llevará a cabo una actuación preliminar, anterior al proceso propiamente dicho, denominada indagación, cuya finalidad es establecer la necesidad de darle curso al proceso y definir si el hecho delictivo se cometió, cómo ocurrió y quiénes participaron en su realización.

"En esta primera fase de indagación, la Fiscalía determinará la existencia del hecho delictivo, las circunstancias en que este se

presentó e identificará a los autores o partícipes. Es posible que los hechos no sean fáciles de verificar y no existan elementos materiales que ayuden en la identificación del ilícito, siendo ese el caso, la Fiscalía y las autoridades de policía judicial,[49] deberán definir la conducta que va a ser objeto de investigación y juicio, mediante actividades y diligencias previas, técnicas y científicas. Para desarrollarlas tendrá como límite el término de prescripción de la acción penal.

“Si por el contrario, existe información suficiente sobre la ocurrencia del delito, sobre las circunstancias en que éste fue cometido y sobre sus autores, no se requiere adelantar esta fase de indagación y se formulará la imputación.

“5.4.3. Una vez cumplida la indagación, si ella fue requerida, la Fiscalía formula ante el juez de control de garantías[51] la imputación contra la persona sobre la que existen indicios de ser la responsable del ilícito. De conformidad con el artículo 286 del C.P.P., la formulación de imputación es “el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías” y se promueve cuando “de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga”. Esta audiencia, que es preliminar conforme al artículo 154 del C.P.P.,[52] será pública y se realizará con la presencia del imputado o de su defensor.[53] La Fiscalía podrá solicitarle al juez de control de garantías las medidas de aseguramiento contra el imputado y las medidas cautelares

sobre sus bienes.[54] La asistencia del Ministerio Público a la audiencia no es obligatoria.[55]

“En esta fase, el indagado adquiere la condición de imputado[56] y será identificado por la Fiscalía.[57] Esta calidad le confiere al imputado las mismas atribuciones asignadas a la defensa que resulten compatibles con su condición.[58]

“Al respecto, es importante destacar que la jurisprudencia constitucional[59] ha dejado establecido que el derecho de defensa se puede ejercer desde la etapa pre procesal de la indagación previa y durante la etapa de investigación anterior a la formulación de imputación, ello en tanto “ni en la Constitución ni en los tratados internacionales de derechos humanos se ha establecido un límite temporal para el ejercicio del derecho de defensa. Como se ha dicho, el derecho de defensa es general y universal, y en ese contexto no es restringible al menos desde el punto de vista temporal. Por consiguiente, el ejercicio del derecho de defensa surge desde que se tiene conocimiento que cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina cuando finalice dicho proceso”.[60]

“5.4.4. Formulada la imputación se inicia oficialmente la etapa de investigación, fase en la cual se practicarán las diligencias que permitan establecer la forma como ocurrieron los hechos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los mismos se presentaron, los implicados en su condición de autores o partícipes, los daños y perjuicios ocasionados con la conducta y el monto de la indemnización.[61] En esta fase el imputado puede aceptar los cargos presentados por la Fiscalía o

rechazarlos. La aceptación total de los cargos formulados con la imputación permite la protocolización inmediata de la acusación[62] y no tendría lugar la etapa de investigación.

"5.4.5. En caso de que haya lugar a la investigación, de conformidad con el artículo 268 del C.P.P., "el imputado o su defensor, podrán buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar los elementos materiales probatorios y evidencia física. Con la solicitud para que sean examinados y la constancia de que es imputado o defensor de este, los trasladarán al respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde los entregarán bajo recibo". En principio, la Fiscalía dispone de noventa días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, para formular la acusación contra el imputado.[63]

"Igualmente, en esta etapa la Fiscalía junto con los organismos de Policía Judicial investigará y recogerá los elementos materiales, las evidencias físicas y las informaciones necesarias para establecer la responsabilidad del imputado en la comisión del delito[64] y deberá actuar con criterios objetivos y transparentes y con respeto de los derechos fundamentales,[65] siendo responsable además de la cadena de custodia.[66]

"Si durante esta etapa de investigación se recogen elementos materiales probatorios o evidencia física o información legalmente obtenida, que permita afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe,[67] la Fiscalía deberá presentar acusación

formal contra el imputado mediante escrito de acusación presentado al juez competente para que se adelante en su contra el juicio oral. En caso contrario, solicitará la preclusión de la investigación.[68]

“En este punto, de acuerdo con la jurisprudencia,[69] el material probatorio que la Fiscalía y la defensa recauden en la investigación no se considera como prueba sino una vez sean decretadas por el juez de conocimiento. Ello por cuanto en este nuevo modelo acusatorio, la Fiscalía carece de competencia para recaudar lo que técnicamente se conoce como prueba procesal. De manera que los elementos de convicción recaudados durante la investigación “tienen simplemente carácter de evidencias, elemento material de prueba o material probatorio, y no constituyen fundamento probatorio de la sentencia, sino en la medida en que el juez de conocimiento decide decretarlos, valorarlos y reconocerlos en la etapa de juicio”.[70]

“5.4.6. La presentación del escrito acusatorio finaliza la etapa de investigación, el cual deberá cumplir los requisitos formales señalados en el artículo 337 del C.P.P.” (CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-559 del 20 de noviembre de 2019, M.P. Dra. Cristina Pardo Schlesinger).

Bajo estas circunstancias no es procedente el decreto de la suspensión del proceso por prejudicialidad penal porque no se cumple con el requisito toral para ello, tal como lo ordena el art. 161 del C.G.P.; esto es, que la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial, puesto que en el presente caso, se itera, solo

se trata de una investigación que se viene adelantando por la Fiscalía General de la Nación, sin que se hubiera dado inicio al proceso penal propiamente dicho, que como ya se precisó surge con el escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación (Art. 336 del C. de Procedimiento Penal), y que a su vez pone fin a la fase investigativa, y que se itera, da lugar al proceso o juicio penal.

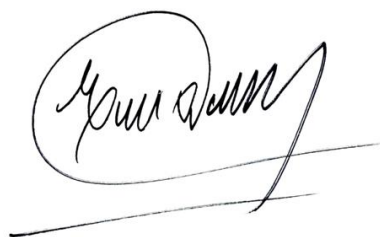
Consecuente con lo anterior, se negará la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad penal, impetrada por el extremo pasivo.

A mérito de lo expuesto el **Tribunal Superior de Medellín, en Sala Segunda de Decisión,**

IV. RESUELVE:

NEGAR la solicitud de suspensión del proceso prejudicialidad penal, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

NOTIFÍQUESE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Enrique Gil Marín', with a long horizontal stroke extending to the right.

LUIS ENRIQUE GIL MARÍN
MAGISTRADO